



UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍO

Res. MEN 014915 - 02 AGO 2022  
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

**AVISO**  
**Febrero 05 de 2024**

Se informa a los inscritos en el Concurso de méritos abierto y de ascenso del año 2022, realizado por la Universidad del Quindío a través de la Universidad de Pamplona, como operador del concurso, que dentro del trámite de Acción de Tutela incoada por la agremiación SINTRAUNICOL- Subdirectiva Universidad del Quindío, radicado 63-001-40-09-007-2023-00178, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de conocimiento de Armenia Quindío, ordenó a la Universidad del Quindío a través de oficio 0288 de febrero 02 de 2024, lo siguiente:


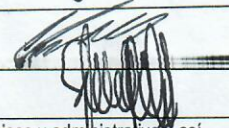
*"Comendidamente le solicito que a través del portal de la Universidad del Quindío o por medio del link creado para llevar el concurso abierto de méritos del año 2022, puedan enterar a los participantes del concurso su VINCULACIÓN ordenada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, al trámite de la acción de tutela de la referencia".*

Que el despacho, del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Conocimiento, acatando la orden del Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia Quindío, dispuso, entre otros:

*"...b. Una vez obtenido el listado de las personas que se encuentran en el concurso ofertado en el Acuerdo 001 de 2022, a través del Juzgado se vinculará a cada aspirante al trámite de la acción de tutela, con el propósito que en el **término de dos (02) días a partir de la notificación** puedan ejercer el derecho a la defensa y contradicción, a fin de prevalecer el debido proceso en el trámite constitucional." (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

En tal sentido, y de acuerdo con lo ordenado, se publica el presente aviso, con los siguientes anexos: escrito de tutela, auto de nulidad decretada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia Quindío, de fecha veintitrés (23) de enero de 2024, copia oficio número 0288 del 02 de febrero de 2024 y auto de fecha veinticinco (25) de enero de 2024, proferido por el Juzgado Séptimo Penal municipal de conocimiento.

  
**ESTELLA LÓPEZ DE CADAVID**  
Rectora Delegada

	Nombres y apellidos	Firma
PROYECTÓ Y ELABORÓ	Nathalie Gallego Arturo- Profesional Especializado Dirección Jurídica	
REVISÓ	Víctor Alfonso Vélez Muño Director Jurídico.	
	Gloria Cristina Zuleta Rincón Directora de Gestión Humana	

Los arriba firmantes que hemos revisado el presente documento y soportes encontrándolo ajustados en términos técnicos y administrativos, así como a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de los funcionarios competentes.



JUZGADO SEPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE ARMENIA  
QUINDIO

Oficio No. 0288  
Febrero 02 de 2024

Representante Legal  
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
Email: [notificaciones@uniquindio.edu.co](mailto:notificaciones@uniquindio.edu.co)  
La Ciudad. -

Asunto:	Notifica Admisión Tutela Posterior a Nulidad
Accionante:	VICTOR HUGO ZEA ROBLEDO
Ag. Ofic:	NO
Accionada:	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
Vinculados:	SI
Radicación:	63 - 001- 40 -09 -007 – 2023-00178

Muy buenas tardes.

Comedidamente le solicito que a través del portal de la Universidad o por medio del LINK creado para llevar el concurso abierto de méritos del año 2022, puedan enterar a los participantes del concurso su **VINCULACIÓN** ordenada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, al trámite de la acción de tutela de la referencia.

Lo anterior en atención que una vez observamos el archivo que fue enviado por las Universidades del Quindío y de Pamplona a este Juzgado, se tiene que el número de personas que participaron como inscriptos en el concurso, asciende a la suma un millar de participantes, y no contamos con la capacidad y tecnología de llevar a cabo dichas notificaciones y vinculaciones.

Es de conocimiento público, que desde la plataforma que fue creada para la convocatoria del concurso, se puede acceder a cada uno de los correos de los inscriptos a fin de ser notificados de las novedades que se presentan y el caso de estudio se requiere su concurso y ayuda al despacho judicial para darle publicidad a las pretensiones de la acción de tutela.

En caso positivo solicitamos encarecidamente envíen las constancias de notificación de los participantes sobre la vinculación que se adelanta. Lo anterior por exigencia del Juzgado de segunda instancia y así poder superar la nulidad decretada. Se deberá anexar el escrito de tutela y auto de nulidad que se adjunta

Atentamente,



ALEJANDRO GIRALDO BUSTAMANTE  
Secretario.

Email: [jo7pmpalfcarm@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jo7pmpalfcarm@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
Palacio de Justicia, Carrera 12 N° 20-63, oficina 204, telefax 7411960  
Armenia - Quindío

Email: [jo7pmpalfcarm@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jo7pmpalfcarm@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
Palacio de Justicia, Carrera 12 N° 20-63, oficina 204, telefax 7411960  
Armenia - Quindío





JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO  
ARMENIA QUINDÍO

AUTO DECLARA NULIDAD

Veintitrés (23) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

ACCIONANTE:	SINTRAUNICOL
REP LEGAL:	VICTOR HUGO ZEA ROBLEDO
ACCIONADA:	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
VINCULADOS:	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Y OTROS
RADICACIÓN:	63 001 40 09 007 2023 00178
RADICACION INTERNA:	2023-00131

ANTECEDENTES

En esta instancia sería del caso proceder a resolver la impugnación presentada por el Representante Legal del Sindicato SINTRAUNICOL, VICTOR HUGO ZEA ROBLEDO contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal Con Funciones de Conocimiento de Armenia Quindío, dentro de la acción de tutela instaurada por VICTOR HUGO ZEA ROBLEDO, si no fuera porque se advierte una nulidad por indebida integración del contradictorio, bajo los siguientes presupuestos.

El accionante asegura que la Universidad del Quindío emitió el Acuerdo 001 de 2022 de manera irregular, convocando a un concurso de méritos para proveer ciertos empleos en la modalidad ingreso y ascenso.

La **UNIVERSIDAD DEL QUINDIO** asegura que, al tratarse de un acto administrativo, que goza de presunción de legalidad, el juez de tutela no puede desplazar al juez administrativo, quien cuenta con amplias facultades y es el competente para dirimir conflictos relativos a actos administrativos.

Las demás entidades no se pronunciaron al respecto.

El fallador de primera instancia declaró la improcedencia de la acción constitucional toda vez que, no se cumplió con el requisito de subsidiariedad de la misma, en el sentido que, el competente para resolver el conflicto es el Juez administrativo. El representante legal del sindicato SINTRAUNICOL, dentro del escrito de impugnación, manifestó que conforme a los postulados de la Corte Constitucional la acción constitucional si es procedente.

CONSIDERACIONES

En virtud de lo anteriormente expuesto, se advierte nulidad por falta integración al contradictorio, bajo los siguientes términos.

La Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-038 de 2019 se refirió al deber oficioso del juez de integrar debidamente el contradictorio.

*"Esta garantía fundamental se predica de todos los procesos judiciales y administrativos, la cual, además, depende de una debida integración del contradictorio. En el trámite de la acción de tutela, "la debida integración del contradictorio asegura que **la autoridad judicial despliegue toda su atención** para determinar la posible vulneración de los derechos fundamentales que aduce el accionante y adopte su decisión convocando a todas las personas que activa o pasivamente se encuentren comprometidas en la parte fáctica de una tutela" Por tanto, si se omite la notificación de alguna providencia emitida a una parte o a un tercero con interés legítimo, o no fue vinculado al proceso, se genera una irregularidad que vulnera el derecho fundamental al debido proceso".*

Asimismo, la Corte Constitucional en Auto 1087 de 2022 determinó el deber de Juez de integrar debidamente el contradictorio y las reglas para poder determinar dicha causal de nulidad:

*"La integración del contradictorio también hace parte de las garantías esenciales del derecho al debido proceso toda vez que materializa el derecho de defensa y de contradicción. Pretermitir la intervención de una parte o un tercero con interés legítimo constituye una vulneración de los derechos mencionados. Por lo cual, "es deber del juez desde la primera instancia, integrar el contradictorio, de manera que garantice el pleno ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción desde el inicio del proceso; si no lo hace, corresponde al de segunda instancia adoptar el remedio procesal y, si la falencia persiste, necesariamente deberá procederse a ello en sede de revisión, evento éste que es excepcional y responde a criterios*

específicos, que buscan ponderar la satisfacción de los derechos fundamentales del afectado en el caso concreto y la protección del debido proceso de la parte vinculada.'''.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en el Auto 583 de 2015 recogió las reglas establecidas en la jurisprudencia a efectos de declarar la nulidad de las providencias judiciales por indebida integración del contradictorio. Dicha providencia dispone como primera regla que el juez de tutela debe integrar el contradictorio en virtud del principio de oficiosidad. Así, cuando la demanda de tutela se dirige contra un sujeto distinto a quien se le puede imputar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, "bien puede el juez de oficio, antes de resolver, vincular al proceso a la persona o entidad contra la cual ha debido obrar el demandante, otorgándole suficientes elementos de defensa dentro del mismo, con arreglo a la garantía constitucional."

La segunda regla señala que la integración del contradictorio también se aplica en el caso en que "aparezca demandado otro ente que, por su actividad, su función o sus actos, ha debido serlo, en otros términos, cuando no se ha integrado debidamente el contradictorio, el juez de tutela, según el análisis de los hechos y de la relación entre las funciones que se cumplen o las actividades que se desarrollan y la invocada vulneración o amenaza de derechos fundamentales (nexo causal), está en la obligación de conformar el legítimo contradictorio, en virtud de los principios de oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela."

En el caso concreto, se tiene que la demanda de tutela radica principalmente en una presunta irregularidad en la expedición del Acuerdo 001 de 2022, el cual convocó a concurso de méritos para la provisión de ciertas vacantes dentro de la Universidad del Quindío, contratando para el desarrollo del concurso a la Universidad de Pamplona.

El Juez de primera instancia al momento de admitir la demanda mediante Auto con fecha 07 de noviembre de 2023 decidió vincular al contradictorio a la Universidad de Pamplona, el sindicato Sintraadmin, y a la Comisión de Carrera Especial Administrativa de la Universidad del Quindío, con el fin de que se pronunciaran sobre el objeto de la demanda de tutela. El 22 de noviembre de 2023 el fallador de primera instancia profirió el respectivo fallo declarando la improcedencia de la demanda.

Con lo anterior, una vez revisados los documentos aportados por las partes, se encuentra un aviso de convocatoria de la Universidad de Pamplona, por ello, este Despacho, al verificar la página web de dicha universidad, encuentra que el concurso de méritos se encuentra en una etapa avanzada como se evidencia en la siguiente imagen:



**CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO Y DE ASCENSO  
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - 2023**

**▼ Avisos convocatoria**

- [Aviso informativo: publicación de Resultados Preliminares Prueba de Valoración de Antecedentes](#)
- [Aviso informativo: Publicación de Resultados Preliminares Prueba de competencias comportamentales \(entrevistas\)](#)
- [Aviso informativo: Citación Prueba de competencias comportamentales \(Entrevistas\)](#)
- [Aviso informativo: respuestas a reclamaciones y publicación de resultados definitivos de las pruebas básicas y funcionales.](#)
- [Aviso informativo: citación proceso de acceso al material Pruebas básicas y funcionales y complemento de las reclamaciones](#)
- [Aviso informativo: CITACIÓN PROCESO DE ACCESO al material Pruebas básicas y funcionales](#)
- [Aviso informativo: publicación de RESULTADOS PRELIMINARES Pruebas Básicas y Funcionales](#)
- [Aviso informativo: Citación Prueba Básicas y Funcionales](#)
- [Aviso informativo: Publicación Ejes Temáticos Prueba Básicas y Funcionales](#)
- [Aviso informativo: respuesta a reclamaciones y publicación en firme de los resultados de verificación de requisitos mínimos.](#)
- [Aviso informativo: publicación de Resultados de Verificación de Requisitos Mínimos y Reclamaciones](#)
- [Aviso de convocatoria 2023](#)

Lo anterior para significar que, dicho concurso cuenta con aspirantes a los empleos ofertados, este Despacho no conoce la cantidad de inscritos en el concurso y los que superaron las pruebas básicas y funcionales, los cuales desconocen en su totalidad el presente trámite tutelar. Se hacía indispensable la vinculación de los aspirantes toda vez que, son ellos los realmente interesados con las resultas de este trámite ya que crearon una expectativa de poder acceder a cargos públicos por medio del Acuerdo 001 de 2022, además, el debate se centra en el acto administrativo que dio origen al concurso de méritos, el cual dio inició al trámite tutelar sin enterarlos debidamente.

Asimismo, la decisión que se adopte dentro del proceso, independientemente del sentido de la misma, afectaría directamente los intereses de dichas personas que están aspirando a los empleos ofertados en el concurso de méritos que convocó la Universidad

del Quindío mediante el Acuerdo 001 de 2022, de allí, la necesidad de vincularlos y evitar una vulneración a garantías fundamentales.

Por lo que, con la no vinculación de los aspirantes se estaría vulnerando sus derechos de defensa y contradicción, así como el debido proceso, y en aras de salvaguardar esas garantías constitucionales, deberá invalidarse el procedimiento adelantado por el Juzgado Séptimo Penal Municipal Con Funciones de Conocimiento de Armenia, Quindío, y en consecuencia, se declarará la nulidad de lo actuado desde el auto por medio del cual se avocó el conocimiento de la demanda de tutela, dejando válidas las pruebas recaudadas en el asunto, devolviendo el expediente al despacho de origen para que subsane tal irregularidad y tramite de manera adecuada la presente acción, vinculando a todos aspirantes del concurso de méritos convocado por la Universidad del Quindío a través del Acuerdo 001 de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia Quindío,

#### **RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD** de lo actuado en el presente trámite, a partir del auto fechado el 07 de noviembre de 2023 por medio del cual se avocó el conocimiento de la demanda de tutela, dejando válidas las pruebas recaudadas en el asunto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Disponer la vinculación a dicho trámite de los aspirantes del concurso de méritos convocado por la Universidad del Quindío a través del Acuerdo 001 de 2022, para que tengan oportunidad de intervenir y ejercer su derecho de defensa y contradicción.

El expediente se devolverá al Juzgado de origen para lo de su competencia.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



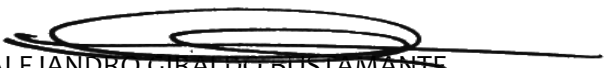
**FRANK MAURICIO VILLARRAGA MARIN**  
Juez

**RECIBIDO**

El día miercoles veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024), las resultas de la actuación de la acción de tutela radicada al número 2023-00178 procedente del Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, quienes decretaron la nulidad de lo actuado desde el auto por medio del cual se avocó el conocimiento de la demanda de tutela, dejando validas las pruebas recaudadas en el asunto. Se allego el pronunciamiento a través del correo institucional.

Pasa a Despacho para que provea.

Armenia Quindío, Enero 24 de 2024.

  
ALEJANDRO GIRALDO BUSTAMANTE  
Secretario.



**JUZGADO SEPTIMO PENAL MUNICIPAL  
DE CONOCIMIENTO**

Armenia, Quindío, veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

Estese a lo dispuesto por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, en su decisión del veintitrés (23) de enero de dos mil veinticuatro (2024) mediante la cual se DECLARO LA NULIDAD de la sentencia proferida el pasado 22 de noviembre de 2023, en el trámite constitucional invocado por el accionante SINTRAUNICOL representado legalmente por Víctor Hugo Zea Robledo, en contra de la Universidad del Quindío y otros, aclarando que la nulidad de lo actuado es desde el auto por medio del cual se avocó el conocimiento de la demanda de tutela, dejando validas las pruebas recaudadas en el asunto. en este sentido y acatando lo ordenado por el superior jerárquico se dispone lo siguiente:

- a. Conforme al pronunciamiento del superior jerárquico que decreto la nulidad advertida por la falta de integración al contradictorio de las personas o aspirantes a los empleos ofertados, como no se conoce la cantidad de inscritos en el concurso y los que superaron las pruebas básicas y funcionales, motivo por el cual

se hace indispensable la vinculación de los aspirantes al concurso ofertado en el Acuerdo 001 de 2022, motivo por el cual se oficiara al Rector de La Universidad del Quindío a fin que facilite el listado de las personas que se encuentren participando del concurso, así como el correo electrónico para hacer la respectiva vinculación al trámite constitucional y así subsanar la irregularidad advertida y que fue objeto de decretar la nulidad.

- b. Una vez obtenido el listado de las personas que se encuentran en el concurso ofertado en el Acuerdo 001 de 2022, a través del Juzgado se vinculara a cada aspirante al trámite de la acción de tutela a través de notificación del correo electrónico que nos alleguen, con el propósito que en el término de dos (02) días a partir de la notificación puedan ejercer el derecho a la defensa y contradicción, a fin de prevalecer el debido proceso en el trámite constitucional.
- c. Se dará traslado del escrito de tutela y de los anexos a la Universidad del Quindío, Universidad de Pamplona, el Sindicato Sintraadmin y a la Comisión de Carrera Especial Administrativa de la Universidad del Quindío, a fin si a bien lo tienen se pronuncien nuevamente frente a los hechos de la acción de tutela.

***Notifíquese y Cúmplase***



MELBA JANNETH LOPEZ GIL

J U E Z A





Armenia, noviembre 3 de 2023

Señor (a)  
**JUEZ(A) TUTELA (REPARTO)**  
Ciudad

**REFERENCIA: ACCION DE TUTELA – CON MEDIDA PROVISIONAL**

**ACCIONANTE:**

**VICTOR HUGO ZEA ROBLEDO**, EN REPRESENTACIÓN LEGAL DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA “SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - SECCIONAL QUINDÍO, CON PERSONERÍA JURÍDICA SEGÚN RESOLUCIÓN N°004964 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1991, NIT. 900491333-8

**ACCIONADO:**

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO **NIT. 890.000.432-8** REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR DR. **LUIS FERNANDO POLANIA OBANDO**. QUIEN FUNGE COMO RECTOR.

**VICTOR HUGO ZEA REBLEDO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.733.861 de Armenia, presidente y representante legal del **SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO – SECCIONAL QUINDIO**, con personería jurídica según resolución N°004964 del 27 de septiembre de 1991, NIT.900.491.333-8; con todo respeto manifiéstanos a usted señor Juez, que en ejercicio del derecho de tutela consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 1.991, por medio del presente escrito formulo **ACCIÓN DE TUTELA** contra la **UNIVERSIDAD DEL QUINDIO NIT. 890.000.432-8 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR DR. LUIS FERNANDO POLANIA OBANDO**, quien funge como rector; o quien haga sus veces al momento de la contestación de la tutela, con domicilio en la ciudad de Armenia en la Dirección: Carrera 15 con calle 12 Norte; Armenia, Quindío. e-mail: [rector@uniquindio.edu.co](mailto:rector@uniquindio.edu.co). Teléfono: 6067359300 ext. 301; con la finalidad que se proteja **el preámbulo, los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, los principios constitucionales de legalidad, derecho al trabajo**, vulnerados por los accionados a los asociados al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA

“SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - SECCIONAL QUINDÍO, que represento, con fundamento en los siguientes

## I. HECHOS

**PRIMERO:** La Universidad del Quindío a través de su Consejo Superior expidió el acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013, por medio del cual se expide el Estatuto de personal Administrativo y Sistema de Carrera Especial para el Personal administrativo de la Universidad del Quindío. Crea la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA**.

**SEGUNDO:** Según el acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013, el capítulo II de la Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa, el área de Gestión Humana y la comisión del Personal; En su artículo sexto taxativamente manifiesta: **Naturaleza de la Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa (CUCEA):** la Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa es el organismo responsable de la administración y vigilancia de la carrera especial administrativa en la Universidad del Quindío, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos en el presente acuerdo, de carácter permanente y de nivel interno.

**TERCERO:** En su artículo Séptimo taxativamente manifiesta: **Conformación de la Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa (CUCEA):** la Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa (CUCEA) estará conformada de la siguiente manera:

- a. Un representante de los empleados inscritos en carrera administrativa elegido por votación directa de los mismos. Quien obtenga la mayor votación será el principal y quien obtenga la segunda será el suplente...
- b. El rector o su delegado.
- c. Un representante del consejo superior.
- d. **Un representante por todas las organizaciones sindicales existentes y legalmente constituidas que agrupen al personal administrativo de la institución, quien deberá ser un empleado de carrera administrativa el cual deberá ser elegido por todos los sindicatos mediante un proceso de elección pública y directa.** (Negritas y subrayas mías.)
- e. El Secretario General de la Universidad del Quindío o quien haga sus veces.
- f. El presidente de la comisión de personal, con voz, pero sin voto.

**CUARTO:** En el parágrafo 1 del artículo séptimo: El periodo de los representantes **de la Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa será de 4 años y deberá integrarse en los siguientes noventa (90) días después de aprobada la planta global de empleos**. Los integrantes de la comisión elegirán un presidente y un secretario de entre sus miembros. **Determinada nuevamente la estructura orgánica de la Universidad del Quindío y las funciones generales de sus**

**dependencias en el acuerdo 133 expedido por el consejo superior el 14 de junio de 2022.**

**QUINTO:** El 31 de mayo de 2022 la Universidad del Quindío expide la resolución 9407, donde convoca a elecciones del representante principal y suplente de los empleados inscritos en carrera administrativa y a la comisión universitaria de carrera especial administrativa – CUCEA, para dar cumplimiento al literal (a.) del artículo séptimo del acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013, Estatuto de personal Administrativo y Sistema de Carrera Especial para el Personal administrativo de la Universidad del Quindío.

Siendo electo en representación de los empleados de carrera administrativa el señor: Carlos Arturo Molina García.

**SEXTO:** La Universidad del Quindío, cuenta con dos sindicatos de trabajadores y empleados:

1. Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia “Sintraunicol Subdirectiva Universidad del Quindío - Seccional Quindío; donde funjo como presidente: yo, Víctor Hugo Zea Robledo.
2. Sindicato Mixto de trabajadores y servidores públicos de la Universidad del Quindío – SINTRAADMIN, donde funge como presidente Leonardo Bonilla Londoño.

**SEPTIMO:** El 24 de junio del 2022 el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia “Sintraunicol Subdirectiva Universidad del Quindío - Seccional Quindío, envía oficio según pedimento de la Universidad del Quindío, donde se aporta la lista de candidatos del sindicato al CUCEA (**Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa**) por este estamento, siendo propuestos en representación del sindicato:

a.) Julián Murillo Hernández. (Principal).

b.) Gloria Inés Marizance Marulanda (Suplente).

**OCTAVO:** El Sindicato Mixto de trabajadores y servidores públicos de la Universidad del Quindío – SINTRAADMIN, no se pronuncia al respecto, presuntamente no está interesado en participar en la Comisión de Carrera Especial Administrativa – CUCEA, razón por la cual no postulo a ninguno de sus miembros.

**NOVENO:** La Universidad del Quindío no hace la convocatoria a elecciones de representante de los sindicatos principal y suplente al CUCEA (**Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa**) para dar cumplimiento al literal (d.) del artículo séptimo del acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013, Estatuto de personal Administrativo y Sistema de Carrera Especial para el Personal administrativo de la Universidad del Quindío. Hecho que debía cumplir a través de la



Secretaria General, independientemente que el Sindicato Mixto de trabajadores y servidores públicos de la Universidad del Quindío – SINTRAADMIN este o no este interesado en participar en la conformación de esta comisión CUCEA.

**DECIMO:** La Universidad del Quindío expide el acuerdo N°133 del 14 de junio de 2022, del consejo superior “Por medio del cual se determina la estructura orgánica de la Universidad del Quindío y las funciones generales de sus dependencias.

**ONCE:** El 15 de junio de 2022, se reúne el CUCEA, sin estar conformado en su totalidad, sin la representación del estamento de los sindicatos y expide el acuerdo 001 de la comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA “Por medio del cual se convoca a concurso publico de Méritos para proveer 14 empleos vacantes y concurso de ascenso para 6 plazas de planta Administrativa, en la Universidad del Quindío.

**DOCE:** Se da una expedición irregular del Acuerdo 001 del 15 de junio de 2022, con violación del derecho fundamental al debido proceso. Este acuerdo aparece firmado por los siguientes estamentos representados por las siguientes personas del CUCEA:

José Fernando Echeverry Murillo – Quien fungía como Rector en ese momento

Luis Fernando Polonia Obando – Representante del Consejo Superior

Claudia Patricia Bernal Rodríguez – Secretaria General

Carlos Arturo Molina García – Representante de los empleados inscritos en carrera Administrativa.

NO hay firma del representante del estamento Sindical, porque no ha sido electo ni nombrado y tampoco existe un aval de ninguno de los sindicatos para que sean representados por los miembros del CUCEA que aparecen firmando la enunciada resolución. Se viola el principio de legalidad y el debido proceso.

**TRECE:** El acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013 en ninguna parte de su articulado dice taxativamente que podrán firmar los acuerdos del CUCEA en representación de otro de los estamentos en caso de que faltare, un miembro de otro estamento, por ello se habla de suplentes y en el caso del rector su delegado.

El acuerdo del CUCEA, 001 del 15 de junio de 2022, no está firmado ni por el principal, ni por el suplente del estamento de los sindicatos y no existe ninguna autorización plasmada en un oficio enviada por el estamento de los sindicatos notificando al rector de esa comisión, que tampoco sería válida.

**CATORCE:** Acuerdo 001 del 15 de junio de 2022 de la comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA que viola el debido proceso y el principio

de legalidad, pues no estaba integrado en su totalidad el CUCEA; el representante de los sindicatos aún no había sido, ni ha sido nombrado en la enunciada comisión pues según el artículo séptimo del acuerdo 011 de agosto 26 de 2013, **deberá integrarse en los siguientes noventa (90) días después de haber sido determinada la estructura orgánica de la Universidad del Quindío y las funciones generales de sus dependencias.** Evento que no ocurrió. Ni a la fecha se encuentra incorporado el representante de los sindicatos. Se da violación al acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013 y por consiguiente al derecho fundamental del debido proceso.

**QUINCE:** Con la Determinación de la estructura orgánica de la Universidad del Quindío y las funciones generales de sus dependencias, aprobada con el acuerdo N°133 del 14 de junio de 2022, solo había transcurrido un día después de su creación y más grave aún el error de realizar la convocatoria sin la representación sindical integrada al CUCEA. Se incumple con lo taxativamente estipulado en el artículo séptimo del acuerdo 011 del 26 de agosto de 2013; Siendo esta convocatoria violatoria del debido proceso.

**DIECISEIS:** Según el artículo séptimo parágrafo 1 del acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013, el 14 de septiembre de 2022 debió integrarse la Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA. Fecha en la cual debieron haber transcurrido los 90 días después de la determinación de la estructura orgánica de la Universidad del Quindío y las funciones generales de sus dependencias, que se expidió por el consejo superior el 14 de junio de 2022 con el acuerdo 133. Se da violación del acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013 en su artículo séptimo. No se cumple el debido proceso y el principio de legalidad.

Se da una pre temporalidad de la acción, al no darse en los términos y tiempos estipulados para constituir el CUCEA, según el acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013, en su artículo séptimo.

**DIECISIETE:** El 1 de septiembre de 2023 aparece un aviso de convocatoria externa, del concurso publico de méritos abierto y de ascenso, teniendo como operador logístico del concurso a la Universidad de Pamplona. Convocatoria que viola el debido proceso, pues cuando toma la decisión de aprobar la convocatoria el CUCEA no estaba constituido acuerde a lo establecido en el acuerdo 011 del 26 de agosto de 2013

Convocatoria, que viola el principio de legalidad, debido proceso e igualdad de los derechos de los trabajadores de la Universidad del Quindío, que primero debe ser una convocatoria interna para darle la oportunidad a todos los empleados que se encuentren en provisionalidad y transitoriedad desempeñando estos cargos al interior de la Universidad.

**DIECIOCHO:** El 11 de septiembre de 2023, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia “Sintraunicol Subdirectiva Universidad del Quindío, presento derecho de petición con radicado 2023RE5445 ante la Universidad

del Quindío, donde pretendíamos la autorregulación por parte de la misma institución y le manifestábamos el error en que estaba incurriendo al no estar plenamente constituida la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa - CUCEA**, con todos los estamentos, incluyendo al sindical, como lo establece el acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013; como también error al expedir el Acuerdo 001 del 15 de junio de 2022 por la comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA “Por medio del cual se convoca a concurso publico de Méritos para proveer 14 empleos vacantes y concurso de ascenso para 6 plazas de planta Administrativa, en la Universidad del Quindío; al no estar conformado por todos y cada uno de los representantes de los diferentes estamentos el CUCEA. Acuerdo que viola el principio de legalidad y del debido proceso.

Derecho de petición donde se le solicita la suspensión de la convocatoria del concurso publico de méritos abierto y de ascenso; como también la solicitud a la Universidad del Quindío que realice la convocatoria a las elecciones de los representantes sindicales y se les exhorta a cumplir el acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013, como taxativamente está estipulado.

La respuesta dada por la Universidad del Quindío, no nos satisface plenamente pues no se nos da una respuesta clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado, acorde como lo manifiesta la Corte constitucional en la sentencia T-1160 de 2001:

*“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.*

*“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.*

*“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.*

*“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.*

**DIECINUEVE:** El 10 de octubre de 2023 a las 9:48 a.m. - PQR670, notifican al sindicato de la contestación del derecho de petición a través del correo electrónico mensajeriauq@uniquindio.edu.co, donde esperábamos que se autorregularan, visibilizaran y corrigieran los errores que están incurriendo al desconocer el acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013, como taxativamente está estipulado, incurriendo en una clara violación al principio de legalidad y al debido proceso, que establece que se debe aplicar a todas las actuaciones administrativas de forma inmediata cuando en virtud de su realización pueda llegar a comprometer los derechos de los administrados.

Efectivamente no atendieron nuestras peticiones, razón por la cual acudimos a este medio. La respuesta dada por la Universidad del Quindío, no nos satisface plenamente pues no se nos da una respuesta clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado.

**VEINTE:** El 19 de mayo de 2021 el consejo superior de la universidad del Quindío, expide el acuerdo 111, por medio del cual se ampliaba el actual periodo del actual representante de los empleados inscritos en carrera administrativa y del actual representante de las organizaciones sindicales, ante la comisión universitaria de carrera especial administrativa – CUCEA.

Acuerdo 111 del 19 de mayo de 2021 que efectivamente solo amplía el periodo del actual representante de los empleados inscritos en carrera administrativa; Pero no es cierto de ampliar el periodo del representante de las organizaciones sindicales, pues NO LA HABIA Y NO LO HA HABIDO. Ni ha habido elecciones para su nombramiento.

**VEINTIUNO:** El 19 de junio de 2022 la Secretaria General de la Universidad del Quindío CLAUDIA PATRICIA BERNAL RODRIGUEZ, envía oficio referenciado como invitación a Sintraunicol para que designen representante principal y suplente a todas las organizaciones sindicales existentes ante la CUCEA, el cual debía estar conformada el 3 de agosto de 2022.

Realmente no ha hecho presencia el representante sindical en la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa** en el CUCEA después del 19 de mayo de 2021.

**VEINTIDOS:** Hechos veinte y veintiuno que deberá demostrar la Universidad del Quindío, aportando la resolución de convocatoria del estamento de los sindicatos a las elecciones, realizada por la secretaria general de la universidad, informando las personas postuladas en representación de los sindicatos, la fecha en que se realizó la elección y el número de votos obtenidos por ellos y mostrar la resolución de nombramiento al CUCEA. Evento que no ha ocurrido.

## II. PROCEDENCIA Y LEGITIMIDAD

Es usted competente señor Juez de tutela por la naturaleza del asunto, porque La Universidad del Quindío es una institución educativa de orden público que debe respetar y cumplir la constitución, la ley, los acuerdos y los convenios internacionales celebrados por Colombia ante la OIT.

Así mismo esta acción de tutela es procedente de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1.991 y el decreto 306 de 1992 desarrollan esta acción que figura como mandato constitucional en el artículo 86 de la carta Superior cuyo objetivo es la garantía plena de la protección de los derechos fundamentales de toda persona.



El contenido y alcance de los derechos fundamentales fue fijado en la Carta Política y definido mediante sentencia T-451 de julio 10 de 1992 por la Corte Constitucional de la siguiente manera: “No se puede determinar sino en cada caso concreto atendiendo tanto la voluntad expresa del constituyente como conexidad o relación que en dicho caso tenga el derecho (...) con otros derechos indubitadamente fundamentales y/o con los principios y valores que informan toda la Constitución”-

Es necesario resaltar que ni los derechos fundamentales, ni la autonomía universitaria y de las organizaciones sociales son absolutas. Tampoco su reconocimiento inhibe la actuación del Estado. No se puede considerar arbitraria o desproporcionada la intervención del Estado dirigido a interponer a las universidades el respeto de los derechos fundamentales de sus miembros o terceros lesionados con sus acciones u abstenciones. Ya que las organizaciones pueden abusar de su condición y someter a una persona o a una minoría a un tratamiento indigno, y, en este evento, la autonomía no podría oponerse a la actuación pública.

Las consideraciones citadas, ilustra como el Estado está en la obligación de respetar la autonomía de las universidades, pero en tratándose de derechos fundamentales como el del debido proceso, puede intervenir en procura de garantizar la observancia de los mismos.

### III. PRINCIPIOS Y DERECHOS CUYA PROTECCION SE IMPLORA

En síntesis, el suscrito pretende a través de esta acción constitucional que se amparen los derechos fundamentales invocados y que considero vulnerados por la administración de la Universidad del Quindío, al no cumplir acuerdo 011 de agosto 26 de 2013 y al expedir el Acuerdo 001 del 15 de junio de 2022 de la comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA “Por medio del cual se convoca a concurso publico de Méritos para proveer 14 empleos vacantes y concurso de ascenso para 6 plazas de planta Administrativa, en la Universidad del Quindío; al no estar conformado por todos y cada uno de los representantes de los diferentes estamentos el CUCEA. Se da la expedición irregular del Acuerdo 001 del 15 de junio de 2022, con violación del derecho fundamental al debido proceso.

En esa medida, valga resaltar que, mediante esta acción de tutela, no se busca atacar la legalidad del acuerdo 011 de agosto 26 de 2013. Por el contrario, lo pretendido por medio de este recurso judicial es que el juez de tutela ordene a la accionada a respetar los derechos fundamentales invocados por el sindicato y que considero lesionados dentro del procedimiento administrativo que llevo a expedir cada uno de los mencionados actos administrativos.

Con esta actitud omisiva, irresponsable y carente de compromiso social por parte de los accionados, al No acatar y cumplir con los postulados constitucionales en su actuar, han vulnerado, **el preámbulo, los derechos fundamentales al debido proceso, los principios constitucionales de legalidad, derecho al trabajo.**

Presentamos esta acción, por considerar que en ella la universidad ha infringido el orden jurídico, por violar el debido proceso y los principios constitucionales de legalidad, se está abusando del derecho que le asiste al desconocer los acuerdos suscritos por la misma Universidad

#### IV. PRETENSIONES

**PRIMERA:** Solicito le sean tutelados al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA “SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - SECCIONAL QUINDÍO **el preámbulo, los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, los principios constitucionales de legalidad, derecho al trabajo,** vulnerados y/o amenazados por los accionados.

**SEGUNDA:** En consecuencia, de la anterior declaración, le solicito señor Juez de tutela se ordene:

- a. Ordenar a la Universidad del Quindío a convocar a elecciones de los representantes del estamento de los sindicatos para conformar la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA**, para dar cumplimiento del acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013, e integrar al representante del estamento sindical a esta comisión.
- b. Declarar nueva expedición de acuerdo, expedido por la comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA “Por medio del cual se convoque a concurso publico de Méritos para proveer 14 empleos vacantes y concurso de ascenso para 6 plazas de planta Administrativa, en la Universidad del Quindío; lo anterior por no estar debidamente constituido la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA**, al faltarle el representante de los sindicatos en la expedición del acto. Lo anterior acorde al artículo séptimo, del acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013.
- c. Suspende la convocatoria del concurso publico de méritos abierto y de ascenso, que tiene como operador logístico del concurso a la Universidad de Pamplona. Lo anterior por no estar constituida la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA** acorde al acuerdo 011 del 26 de agosto de 2013.
- d. Que se ordene a la Universidad del Quindío, cumplir el acuerdo N°011 del 26 de agosto de 2013 como taxativamente está estipulado.

## V. MEDIDA PROVISIONAL

Con el propósito de salvaguardar los derechos fundamentales a **el preámbulo, los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, los principios constitucionales de legalidad, derecho al trabajo**, invocados dentro de este amparo, solicito como medida provisional que se ordene a las autoridades accionadas a suspender el proceso de convocatoria del concurso publico de méritos abierto y de ascenso, que tiene como operador logístico del concurso a la Universidad de Pamplona. Lo anterior por no estar constituida la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA** acorde al acuerdo 011 del 26 de agosto de 2013, **hasta tanto se resuelva de manera definitiva la presente acción constitucional.**

### 5.1. FUNDAMENTOS DE LA MEDIDA PROVISIONAL.

El artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 determinó acerca de la medida provisional en acciones de tutela lo siguiente:

*“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. **Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho**, suspenderá la aplicación del actoconcreto que lo amenace o vulnere.*

*Sin embargo, a petición de parte **o de oficio**, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. **En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favordel solicitante.***

*La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.*

***El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados,** todo de conformidad con las circunstancias del caso.*

*El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidascautelares que hubiere dictado.” (Negrilla fuera de texto).*

Según la sentencia T-103 de 2018 las medidas provisionales están dirigidas a: “i) **proteger los derechos de los demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio**; ii) **salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración**; y iii) **evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos fines (inciso 2º del artículo transcrito)**”.

Ahora, conforme con el Auto 312 de 2018 emitido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, reiterado de forma reciente a través de Auto 259 de 2021, se tiene que para decretar una medida provisional el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de tres exigencias básicas, como son:

1. Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (*fumus boni iuris*).
2. Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (*periculum in mora*).
3. Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afectado directamente.

En este asunto, se encuentran demostradas las exigencias de la Corte Constitucional para decretar la medida provisional, veamos:

#### **5.1.1. Cumplimiento del requisito de apariencia del buen derecho “*fumus boni iuris*”.**

En lo que respecta al primer requisito para valorar la procedencia de la medida provisional que se solicita en esta oportunidad, desde la doctrina se ha definido que la apariencia de buen derecho supone que “**al momento de solicitarse la adopción de una medida cautelar, el peticionario debe acreditar que su pretensión o pretensiones del proceso que adelanta, reúnen las condiciones para ser juzgadas a su favor por el juez o árbitro que resolverá el conflicto. Sin embargo, se trata de una apariencia de buen derecho basada en la probabilidad, posibilidad, verosimilitud, etc., más nunca en la certeza de lo que se pide, porque ese grado de certeza solo es posible alcanzarlo en el proceso principal...**”<sup>23</sup>. Rodríguez Mejía, Marcela. Medidas cautelares en el proceso arbitral. 1a ed. Bogotá D.C., Colombia. Universidad Externado de Colombia, 2013.



Así mismo se ha afirmado que la apariencia de buen derecho se configura entonces a partir de un fuerte soporte en el sistema normativo de la Constitución Política de 1991, o, en otros términos, en las diferentes fuentes del derecho que frente al caso concreto permiten además de apreciar la legitimación o el interés para actuar, hacer ver al juez la apariencia de buen derecho, desde la multiplicidad de normas sustanciales que le sean pertinentes a ese problema<sup>24</sup>. La medida provisional (cautelar) en el proceso constitucional de Tutela: Tipologías y Reglas para su procedencia (Editorial Ibañez, ISBN: 978-958-791-310-1, Bogotá año 2020. Resultado de investigación.

Para la Corte Constitucional la apariencia del buen derecho “*aduce a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal*”<sup>25</sup>. Aclarando el Alto Tribunal que “*como es apenas obvio en la fase inicial del proceso, no se espera un nivel total de certeza sobre el derecho en disputa, sí es necesario un estándar de veracidad apenas mínimo*”<sup>26</sup>. Sentencia SU-913 de 2009.

En este caso está demostrado que:

- La Universidad del Quindío no ha constituido en su totalidad la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA**, pues hace falta la representación del estamento sindical acorde al acuerdo 011 del 26 de agosto de 2013.
- Que el acuerdo 001 DEL 15 de junio de 2022, expedido por la comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA no se profirió conforme al acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013, artículo séptimo, por no estar debidamente constituido la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA**, al faltarle el representante de los sindicatos en la expedición del acto.
- Que la Universidad del Quindío no ha convocado a elecciones de los representantes del estamento de los sindicatos para conformar la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA**, para dar cumplimiento del acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013, e integrar al representante del estamento sindical a esta comisión.

Por lo argumentado ratifico la solicitud de la medida provisional.

### **5.1.2. Cumplimiento del requisito peligro de la mora**

La jurisprudencia constitucional bajo el parámetro “[p]rincipios que rigen la práctica de medidas cautelares, para efectos de garantizar un justo término de equidad en el proceso”<sup>47</sup>, frente al periculum in mora, ha motivado: “*El primero, periculum in mora, tiene que ver con el riesgo de que al no adoptarse la medida cautelar sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente*

***que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o su a menoscabo durante la sustanciación del proceso.”.***

La Corte Constitucional mediante Auto 259 de 2021 dijo con relación al *periculum in mora* que se materializa cuando “(...) exista un riesgo probable de **que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión**, esto es, que haya un peligro en la demora”

### **5.1.3. Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.**

Frente a este requisito, la Corte Constitucional a través de Auto 259 de 2021 reseñó que:

*“incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. Si bien en esta fase inicial **no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad**, sí es necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. **La ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable (...)**”*

En este asunto, está demostrado que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida provisional que concederla.

## **VI. FUNDAMENTO JURIDICO DEL AMPARO**

### **6.1. De los requisitos de procedibilidad.**

En suma, puede decirse que la acción de tutela se estructura como un mecanismo judicial que se tramita a través de un procedimiento preferente y sumario para la defensa de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por las acciones u omisiones de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos que la ley establece, al cual puede acudir solamente: **i)** ante la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial idóneo, salvo que se demuestre la configuración de un perjuicio irremediable; o **ii)** cuando aun existiendo un vehículo ordinario el mismo no sea idóneo ni eficaz para garantizar los derechos fundamentales alegados.

Debe entenderse como un daño inminente e irreparable que por su gravedad amerita el amparo inmediato de manera transitoria. En la sentencia T-028 de 2016, se señala que la **idoneidad** hace referencia a la aptitud material del mecanismo judicial para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo que ocurre cuando el medio de defensa se corresponde con el contenido del derecho. respecto **a la eficacia**, se ha indicado que se relaciona con el hecho de que el mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde de manera oportuna e integral una protección al derecho amenazado o vulnerado.

En lo referente a la expedición del acuerdo 001 del 15 de junio de 2022 por la comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA, donde aprueba la convocatoria a los concursos públicos de méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos por el Máximo Tribunal Constitucional ha reivindicado la pertinencia de la acción de tutela, pese a la existencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que eventualmente pueda ejercer el perjudicado, dado que éste no ofrece la suficiente eficacia en el tiempo para proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y el de acceso a los cargos públicos.

En tal sentido, la Corte Constitucional precisó en sentencia T-507 de 2012 lo siguiente:

(...)

*Sin embargo, no basta con verificar que existe otro medio de defensa para declarar improcedente la acción de tutela, sino que se debe evaluar la eficacia del medio judicial de defensa en cada caso concreto. Esto por cuanto hay mecanismos de defensa que si bien son aptos para la solución de un conflicto determinado, no son adecuados ni eficaces en la protección de los derechos fundamentales de la persona que requieren de una solución inmediata a su caso.*

*Al respecto, ha dicho la Corporación que “[E]n efecto, la Corte ha indicado que, en principio, la acción de tutela no procede para controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos<sup>54</sup>. Sin embargo, posteriormente la jurisprudencia constitucional encontró que existen, al menos, dos excepciones a la regla antes planteada. **En primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la persona afectada no tiene un mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran<sup>55</sup> o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional<sup>56</sup>. En segundo lugar, procede la tutela cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción. Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso administrativo pero que, dadas las circunstancias concretas y la inminente consumación de un daño iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez constitucional.”** T-315 de 1998 MP Eduardo Cifuentes Muñoz”.*

(...)

**Para la Corporación es claro que la vulneración de los derechos a la igualdad, al trabajo, debido proceso y, al acceso y participación en cargos públicos, que se presenta cuando las autoridades públicas desconocen los mecanismos de selección establecidos en los concursos públicos, no se resarce por medio del mecanismo ordinario, puesto que éste implica unos trámites dispendiosos y demorados frente a una situación que requiere una solución**

**inmediata, para la efectiva protección del principio de carrera consagrado en el artículo 125 de la Constitución Política.** Principio que, además, ha sido considerado como eje central de la Constitución Política de 1991, tanto así que la Corporación ha sostenido que “[D]entro de la estructura institucional del Estado colombiano, diseñada por el Constituyente de 1991, la carrera administrativa es, entonces, un principio constitucional y, por lo mismo, una de las garantías cuyo desconocimiento podría acarrear la sustitución de la Constitución.” “C-588 de 2009 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo”.

(...) (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En la misma línea, la sentencia T-682 de 2016 reiteró:

**En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en principio, la acción de tutela debe declararse improcedente. No obstante lo anterior, el precedente de la Corte ha señalado que los medios de control de la jurisdicción contencioso administrativa, bien sea a través de la acción electoral, de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o de la acción de reparación directa, no son los mecanismos idóneos y eficaces, en razón del prolongado término de duración que este tipo de procesos pudiese tener.** Ver entre otras sentencias T-509 de 2011, T-748 de 2013 y T-748 de 2015.

Específicamente, en lo que tiene que ver con la procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos, se ha precisado, por parte del precedente de la Corporación, que existen dos casos en los cuales la acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo: (i) “aquellos casos en los que la persona afectada no tiene un mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional”. (ii) “cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción. Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso administrativo pero que, dadas las circunstancias concretas y la inminente consumación de un daño iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez constitucional.” T-315 de 1998.

Así mismo, valga señalar que la Corte Constitucional reiteró lo dicho hasta el momento frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela en concurso de méritos, por medio de sentencia T-340 de 2020, así:

*Dentro de este contexto, por regla general, la acción de tutela no procede contra los actos administrativos dictados dentro de un concurso de méritos, por cuanto el afectado puede acudir a los medios de defensa disponibles en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para el efecto. Incluso, con la expedición de la Ley 1437 de 2011, los demandantes pueden solicitar la adopción de medidas cautelares de todo tipo (preventivas, conservativas, anticipadas o de suspensión) cuyo contenido de protección es amplio y admiten su concurrencia dependiendo del caso (según la*

*ley: “el juez o magistrado ponente podrá decretar una o varias” al mismo tiempo), con lo cual se pretende garantizar el acceso material y efectivo a la administración de justicia. Esta circunstancia debe ser objeto de análisis en el estudio de procedencia de la acción de tutela. Sentencia T- 610 de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera.*

*Ahora bien, desde una perspectiva general, la Corte ha sostenido que, pese a la existencia de las vías de reclamación en lo contencioso administrativo, existen dos hipótesis que permiten la procedencia excepcional de la acción de tutela. La primera, se presenta cuando existe el riesgo de ocurrencia de un perjuicio irremediable, causal que tiene plena legitimación a partir del contenido mismo del artículo 86 del Texto Superior y, por virtud de la cual, se le ha reconocido su carácter de mecanismo subsidiario de defensa judicial. Y, la segunda, cuando el medio existente no brinda los elementos pertinentes de idoneidad y eficacia para resolver la controversia, a partir de la naturaleza de la disputa, de los hechos del caso y de su impacto respecto de derechos o garantías constitucionales.*

Por último, en la sentencia SU-067 de 2022, proferida por la Corte Constitucional precisamente en el marco de la presente convocatoria 27, indicó sobre la procedencia de la acción de tutela en estos casos, lo siguiente:

*(...) la jurisprudencia constitucional ha instaurado **tres excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de los concursos de mérito**. Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo (...)*

### **EN ESTE CASO, SE SUPERAN LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD POR LO SIGUIENTE:**

**SUBSIDIARIEDAD:** Como se ha manifestado desde el inicio de este escrito, el sindicato no ataca mediante esta tutela el contenido de ningún acto administrativo. Se solicita que se cumpla el acto administrativo, el acuerdo 011 del 26 de agosto de 2013, expedido por la Universidad del Quindío; Por el contrario, la vulneración de los derechos fundamentales al Sindicato, invocados provienen del desconocimiento total y la ausencia total de la aplicación del acuerdo 011 del 26 de agosto de 2013, por las decisiones tomadas por la administración, que amenazan y ponen en riesgo los derechos laborales y garantías de todos los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de la Universidad del Quindío, cuando se aprueba una convocatoria de concurso de méritos, incumpliendo los propios acuerdos expedidos por la administración misma.

Bajo el anterior contexto, resulta claro que no existe otro mecanismo judicial idóneo ni eficaz dentro del ordenamiento jurídico para proteger los derechos

fundamentales del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia “Sintraunicol Subdirectiva Universidad del Quindío - Seccional Quindío, por cuanto, se repite, al no haber acusación contra ningún acto administrativo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no sería el mecanismo eficaz ni idóneo para el propósito buscado mediante este amparo.

Así las cosas, el asunto bajo análisis se ubicaría en la primera de las hipótesis señaladas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022 -antes enunciada-, como quiera que no existe mecanismo judicial que permita demandar la protección de los derechos fundamentales acá invocados. Circunstancia por la cual, se concluye que la presente acción de tutela supera el estadio de subsidiariedad.

En gracia de discusión, si se sostuviera que lo procedente es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la realidad demuestra que este mecanismo de defensa no es idóneo, ni eficaz, en el caso específico.

*“Ahora bien, en la sentencia CC SU-691 de 2017 la Corte Constitucional estableció que la existencia del aludido medio de defensa no significa **la improcedencia automática y absoluta de la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales**. En contraste, los jueces de tutela deben realizar un juicio de idoneidad en abstracto y de eficacia en concreto de esos mecanismos y, en ese sentido, están obligados a considerar el contenido de la pretensión y las condiciones de los sujetos involucrados.*

#### **INMEDIATEZ<sup>69</sup>:**

Este requisito también se cumple en este caso por las siguientes 2 razones: i) porque no ha pasado tiempo considerable desde la actuación que se considera lesiva de nuestros derechos fundamentales hasta el momento de acudir ante el Juez de tutela, debido a que con la presentación del derecho de petición incoado ante la Universidad del Quindío, exteriorizamos nuestro inconformismo por el desconocimiento del acuerdo 011 del 26 de agosto del 2013 por parte de la misma institución y con su respuesta la vulneración de las garantías fundamentales del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia “Sintraunicol Subdirectiva Universidad del Quindío - Seccional Quindío y ii) porque las conductas que amenazan o vulneran los derechos fundamentales continúan vigentes al momento de interponerse este amparo, como quiera que las autoridades accionadas no han contestado de manera clara, congruente y de fondo los argumentos expuestos en el derecho de petición.

Por lo expuesto, **es viable que el Juez constitucional decida de fondo el presente asunto.**

## 6.2. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO.

### Derecho al debido proceso.

“El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo o judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo.” (C-339 de 1996).

“El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, para la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser respetadas las formas propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del máximo de garantías jurídicas en relación con las actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido proceso.” (T- 078 de 1998).

### Debido proceso administrativo.

Dentro del derecho fundamental al debido proceso se encuentra el denominado “*debido proceso administrativo*”, el que ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como “*(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, **materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa** (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. El objeto de esta garantía superior es (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración,*

*(ii) la validez de sus propias actuaciones, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados*”<sup>75</sup>.

El máximo Tribunal Constitucional<sup>76</sup> indicó las garantías mínimas que implica el derecho fundamental al debido proceso administrativo, entre las que se tiene: “*(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.*”



## El debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia

La Constitución, en el artículo 29, consagra el derecho fundamental al debido proceso y establece que se aplicará a toda clase de actuaciones, ya sean ellas judiciales o administrativas. Como lo ha señalado esta Corporación, el debido proceso es un derecho de aplicación inmediata (CP art. 85), que, en relación con el desarrollo de las actuaciones administrativas, pretende regular el ejercicio de las facultades de la Administración, cuando en virtud de su realización puedan llegar a comprometer los derechos de los administrados.

De esta manera, el debido proceso administrativo se ha definido como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes de las autoridades públicas y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de sus actuaciones dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos previstos en la ley<sup>[12]</sup>. En este orden de ideas, por ejemplo, en la Sentencia C-980 de 2010<sup>[13]</sup>, esta Corporación indicó que: “(...) *Dentro de ese marco conceptual, la Corte se ha referido el debido proceso administrativo como ‘(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal’*<sup>[14]</sup>(...)”.

Por esta razón, se ha considerado que se presenta una vulneración del citado derecho, cuando son desconocidas las disposiciones a las que ha de sujetarse el desenvolvimiento de la función administrativa. Precisamente, en la referida Sentencia C-980 de 2010, esta Corporación señaló que: “*el debido proceso administrativo se entiende vulnerado, cuando las autoridades públicas no siguen los actos y procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos, y, por esa vía, desconocen las garantías reconocidas a los administrados*<sup>[15]</sup>”.

Adicionalmente, el CPACA también categoriza al debido proceso como un principio, cuyo objeto es garantizar los derechos de defensa y contradicción de quienes se someten al desarrollo de una actuación administrativa<sup>[17]</sup>.

La armonización de ambos principios conduce a entender que existe a cargo de la Administración la obligación de dar a conocer sus actos y que, como consecuencia de ello, siempre que existan razones para discrepar de su contenido, los interesados pueden ejercer mecanismos de defensa con el fin de controvertirlos. A juicio de esta Sala, lo anterior explica la posibilidad de interponer recursos contra los actos administrativos definitivos<sup>[18]</sup>, cuyo objeto es decidir –directa o indirectamente– el fondo del asunto o hacer imposible la continuación de una actuación<sup>[19]</sup>, pues a través de ellos se garantiza la contradicción de los administrados y se les brinda la oportunidad de cuestionar las decisiones que los afecten.

## Principio de Legalidad

La legalidad como principio y en su acepción jurídica más aceptada, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho vigente. ... Su respeto o su inobservancia marcan la diferencia entre un estado democrático o aquel que se distingue por ser autoritario. el principio de

legalidad se opone a los actos que estén en contraste con la ley, a los actos no autorizados por la ley y a los actos no regulados completamente por la ley.

Adicional a lo dicho, la prerrogativa en mención se apareja con el principio de legalidad imperante en el Estado Social de Derecho, pues implica que los procedimientos y actuaciones que se adelanten ante aquellas entidades o particulares que ejercen funciones administrativas deban regirse estrictamente a lo contemplado en la Constitución, Ley o reglamento, so pena de quebrantar el derecho fundamental al debido proceso, dado que constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades discrecionales que a dichas autoridades les corresponden según lo permite el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011.

En tal medida, como está probado que la Universidad del Quindío no se pronunciaron de manera CLARA, CONGRUENTE y de FONDO acerca de **todos** los argumentos y peticiones plasmados en el Derecho de petición y en el escrito de complementación objeto de esta tutela, permite concluir con facilidad que se están vulnerando los derechos fundamentales **al debido proceso, a la igualdad, los principios constitucionales de legalidad, derecho al trabajo**.

### 6.3. DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la igualdad es un concepto multidimensional porque puede referirse a un principio, valor o derecho<sup>81</sup>. Esta última dimensión, esto es el derecho fundamental a la igualdad, se encuentra consagrado en el artículo 13 de la Constitución Nacional de la siguiente manera:

**Artículo 13.** *Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.*

*El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.*

*El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan*

La anterior disposición muestra que en nuestro ordenamiento jurídico se superó la igualdad formal, en que todos los individuos son iguales ante la Ley, para dar paso a una igualdad material, en virtud de la cual no puede estandarizarse a todas las personas, sino que cada decisión, de cualquier orden, debe tener en cuenta las diferencias existentes en el grupo poblacional que se pretende regular. De acuerdo con la Corte Constitucional no todo trato diferente es injustificado desde el punto de vista constitucional, pues *“un trato diferente basado en razones constitucionalmente legítimas es también legítimo, y un trato diferente que no se apoye en esas razones debe considerarse discriminatorio y, por lo tanto, prohibido”*<sup>82</sup>.

### **Derecho a la igualdad,**

- La igualdad ante la ley es principio jurídico que se deriva del reconocimiento de la persona como criatura dotada de unas cualidades esenciales -comunes a todo el género humano- que le confieren dignidad en sí misma, con independencia de factores accidentales como aquellos que a título de ejemplo enuncia el artículo transcrito, lo que implica proscripción de toda forma discriminatoria, sea ella negativa o positiva, en las relaciones entre gobernantes y gobernados así como en la creación, definición y aplicación de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Este, en el Estado de Derecho, es un conjunto armónico puesto en relación con la comunidad a la cual obliga y, en acatamiento al aludido principio, está llamado a procurar no tan solo una igualdad formal o de alcance puramente teórico en materia de derechos, deberes y obligaciones, sino que debe proyectarse al terreno de lo real, para hacerla efectiva mediante fórmulas concretas que eleven las posibilidades de quienes por sus condiciones de manifiesta inferioridad, no alcanzarían de otra manera el nivel correspondiente a su dignidad humana.

Al respecto, la Corte Constitucional ya formuló en reciente fallo algunas precisiones sobre el sentido del referido precepto, entre las cuales, para los fines de este proceso, cabe citar las siguientes:

“Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática.

“Hay pues que mirar la naturaleza misma de las cosas; ella puede en sí misma hacer imposible la aplicación del principio de la igualdad formal, en virtud de obstáculos del orden natural, biológico, moral o material, según la conciencia social dominante en el pueblo colombiano.

“Por ello, para corregir desigualdades de hecho, se encarga al Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. En este sentido se debe adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de inferioridad manifiesta, como afirma el artículo 13 en sus incisos 2º y 3º.

“La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad” (Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.).

- Existe, pues, un principio general de igualdad entre las personas, cuyo carácter no puede tomarse como absoluto, ya que el supuesto del cual se parte no es el de la plena identidad entre los individuos (igualdad de hecho), de suyo imposible, sino el de una esencia común perfectamente compatible con la natural diversidad de caracteres, propiedades, ventajas y defectos de cada uno y con las distintas circunstancias en medio de las cuales actúan. De ahí que la igualdad ante la ley en su genuina concepción jurídica, lejos de significar ciega uniformidad, representa razonable disposición del Derecho, previa ponderación de los factores que inciden de manera real en el medio dentro del cual habrá de aplicarse y de las diversidades allí existentes. Así lo tiene establecido de tiempo atrás la jurisprudencia constitucional colombiana, como puede observarse en la Sentencia mediante la cual, citando a León Duguit, la Corte Suprema de Justicia afirmó que la igualdad no puede interpretarse como absoluta, matemática, sino “en el sentido de que todos los hombres deben ser igualmente protegidos por la ley; que las cargas deben ser no aritméticamente iguales, sino proporcionales. Es preciso no olvidar jamás que queriendo realizar la igualdad matemática de los hombres, se corre fuerte riesgo de crear la desigualdad” (C.S.J. Sala Plena. Sentencia de marzo 5 de 1970. Ponente: Magistrado Luis Sarmiento Buitrago. G.J. Tomo CXXXVII bis, No. 2338 bis, pág. 72.)

- En concordancia con lo anteriormente expuesto, el ordenamiento jurídico, fundado en la Constitución, ha de reconocer el ámbito de la igualdad y discernir en el campo de las desigualdades, a fin de evaluar con criterio objetivo cuáles son las normas que deben plasmar idéntico tratamiento para todos y cuáles, por el contrario, tienen que prever consecuencias jurídicas distintas para hipótesis diferentes. Entonces, no realiza este principio el sistema legal que otorgue privilegios injustificados o establezca discriminaciones arbitrarias entre iguales, ni tampoco el que atribuya iguales consecuencias a supuestos disímiles, ni el que desconozca a los más débiles el derecho fundamental que la Carta Política les confiere a ser especialmente protegidos, habida cuenta de la debilidad en que se encuentran frente a los demás. Desde luego, las distinciones que establezca el legislador tienen por límite la preceptiva constitucional, muy especialmente los derechos que ella reconoce y los deberes que impone a las personas y a la sociedad.

- En este orden de ideas los motivos de interés colectivo, de justicia social o de equidad pueden hacer indispensable que, en desarrollo de postulados constitucionales, se consagren excepciones a las reglas generales, cuyo sentido no puede interpretarse como ruptura del principio de igualdad si encajan razonablemente dentro de un conjunto normativo armónico, orientado a la realización de los fines del Estado. (Corte constitucional Sentencia C-472 de 1992)

- La igualdad ante la ley o principio de igualdad, La igualdad se construye como un límite de la actuación de los poderes públicos y como un mecanismo de creación frente a la posibilidad arbitraria del poder.

- El principio de igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales. De ahí que lo constitucionalmente vetado sea el trato desigual ante situaciones idénticas. Ha de reunir el requisito de la razonabilidad, es decir, que no colisione con el sistema de valores constitucionalmente consagrado. (Sentencia No. T-187/93)

- La igualdad de oportunidades en un mundo caracterizado por diferencias de todo tipo (étnicos, culturales, económicos, sociales, políticos) se garantiza mediante la misma protección y trato a las autoridades, sin que haya lugar a discriminación. Pero su consecución sólo es posible estableciendo diferencia en favor de personas o grupos en situaciones de desigualdad por sus condiciones concretas de marginamiento, discriminación o debilidad manifiesta.

“No es la diferencia, tampoco la distinción, lo que configura la discriminación, sino la negación de un bien que es debido. Lo contrario a la igualdad es así la discriminación, la cual podría concebirse como la falta de proporcionalidad dentro de un ordenamiento jurídico, o la negación de lo debido en justicia, mediante vías de hecho. De lo anterior, se deduce que existen dos clases de discriminación, la legal - caso de las leyes injustas-, o la de hecho, es decir, la que contraría el orden legal preestablecido”. (Sentencia C-351 de 1995).

“El verdadero alcance del derecho fundamental a la igualdad consiste, no en la exactitud matemática de las disposiciones que se apliquen a unas y otras personas, sino en la adecuada correspondencia entre las situaciones jurídicas objeto de regulación o gobierno y los ordenamientos que se hacen exigibles a ellas.

- La igualdad se rompe cuando, sin motivo válido -fundado en razones objetivas, razonables y justas-, el Estado otorga preferencias o establece discriminaciones entre los asociados, si éstos se encuentran en igualdad de circunstancias o en un nivel equiparable desde el punto de vista fáctico.” (C-384 de 1997).

- El artículo 13 constitucional indica que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, con lo cual se pretende que por lo menos en lo referente a la primacía de los derechos fundamentales, la igualdad no se limite al reconocimiento formal por el ordenamiento jurídico, sino a su efectiva realización en el terreno fáctico, es decir a la igualdad sustancial. Aceptada como principio y como valor, la igualdad no sólo exige que las leyes sean aplicadas a todos los casos que

caen bajo sus supuestos de hecho, sino que también debe estar presente en la formulación del derecho. (Sentencia 1287 de 2001 Corte Constitucional)

- El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, 60 revista de derecho, universidad del norte, 18: 58-84, 2002 etc., dimensiones todas ésas que en justicia deben ser relevantes para el derecho. (Sentencia T-432 de junio 25 de 1992). (El subrayado es nuestro).

## VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento esta acción en el artículo 86 de la constitución política y sus decretos reglamentarios 2591 de 1991 y el decreto 306 de 1992. **Fundamento constitucional de los derechos vulnerados:** en el preámbulo, artículo 1º, 5º, 13, 23, 25, 29, 55 de la Constitución Política

## VI. FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES

### SENTENCIA C-479/92

#### “CONSTITUCION POLITICA/PREAMBULO-Vulneración/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

El Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones jurídicas. Lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ella. Las normas pertenecientes a las demás jerarquías del sistema jurídico están sujetas a **toda** la Constitución y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en su articulado, menos aún les está permitida la transgresión de las bases sobre las cuales se soportan y a cuyas finalidades apuntan. El Preámbulo goza de **poder vinculante** en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma -sea de índole legislativa o de otro nivel- que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios.

## **IGUALDAD ANTE LA LEY. Sentencia No. C-588/92**

*Con arreglo al principio de igualdad, desaparecen los motivos de discriminación o preferencia entre las personas. Basta la condición de ser humano para merecer del Estado y de sus autoridades el pleno reconocimiento de la dignidad personal y la misma atención e igual protección que la otorgada a los demás. El legislador está obligado a instituir normas objetivas de aplicación común a los destinatarios de las leyes, sin concebir criterios de distinción que representen concesiones inmerecidas a favor de algunos o trato peyorativo respecto de otros. Las diferencias que se introduzcan deben estar inspiradas, bien en la realización del propósito constitucional de la igualdad real, o en el desarrollo de los postulados de la justicia distributiva.*

## **IGUALDAD ANTE LA LEY-Alcance Sentencia T-149/13**

*La igualdad que estatuye el precepto constitucional no implica que el trato dado por la ley a las personas deba ser idéntico, pues bien se sabe que al Estado corresponde contrarrestar aquellas desigualdades surgidas de condiciones económicas, físicas o mentales, por cuya razón, ciertas personas se encuentran respecto de las demás en circunstancias de debilidad manifiesta. En desarrollo del concepto de igualdad real y efectiva, las autoridades públicas están obligadas a introducir en sus actos y decisiones, elementos que desde el punto de vista formal podrían parecer discriminatorios, pero que sustancialmente tienden a lograr un equilibrio necesario en la sociedad, por cuya virtud se superen en la medida de lo posible, las deficiencias que colocan a algunos de sus miembros en notoria posición de desventaja.*

## **DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Definición/DEBIDO PROCESO-Garantías**

### **Sentencia C-341/14.**

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la



independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

## PRETENSIONES

**PRIMERA:** Solicito le sean tutelados al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA “SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - SECCIONAL QUINDÍO **el preámbulo, los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, los principios constitucionales de legalidad, derecho al trabajo, vulnerados y/o amenazados por los accionados.**

**SEGUNDA:** En consecuencia, de la anterior declaración, le solicito señor Juez de tutela se ordene:

- 2.1 Ordenar a la Universidad del Quindío a convocar a elecciones de los representantes del estamento de los sindicatos para conformar la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA**, para dar cumplimiento del acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013, e integrar al representante del estamento sindical a esta comisión.
- 2.2 Declarar la ineficacia y/o nulidad del acuerdo 001 DEL 15 de junio de 2022, expedido por la comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA “Por medio del cual se convoca a concurso publico de Méritos para proveer 14 empleos vacantes y concurso de ascenso para 6 plazas de planta Administrativa, en la Universidad del Quindío; lo anterior por no estar debidamente constituido la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA**, al faltarle el representante de los sindicatos en la expedición del acto. Lo anterior acorde al artículo séptimo, del acuerdo N°011 de agosto 26 de 2013.
- 2.3 Suspender la convocatoria del concurso publico de méritos abierto y de ascenso, que tiene como operador logístico del concurso a la Universidad de Pamplona. Lo anterior por no estar constituida la **Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa – CUCEA** acorde al acuerdo 011 del 26 de agosto de 2013.

- 2.4 Que se ordene a la Universidad del Quindío, cumplir el acuerdo N°011 del 26 de agosto de 2013 como taxativamente está estipulado.

### **MEDIOS DE PRUEBA**

- Certificado de existencia y representación del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia “Sintraunicol Subdirectiva Universidad del Quindío.
- Cedula de ciudadanía representante legal Sintraunicol U. del Quindío.
- Certificado de existencia y representación legal de la Universidad del Quindío.
- Acuerdo N°011 del 26 de agosto de 2013 por medio del cual se expide el Estatuto de personal Administrativo y Sistema de Carrera Especial para el Personal administrativo de la Universidad del Quindío.
- Acuerdo 111 del 19 de mayo de 2021 por medio del cual se ampliaba el actual periodo del actual representante de los empleados inscritos en carrera administrativa y del actual representante de las organizaciones sindicales, ante la comisión universitaria de carrera especial administrativa – CUCEA.
- Resolución 9407 del 31 de mayo de 2022, donde convoca a elecciones del representante principal y suplente de los empleados inscritos en carrera administrativa y a la comisión universitaria de carrera especial administrativa – CUCEA.
- Foto oficio del 1 de junio de 2022 enviado a Sintraunicol Universidad del Quindío por la Secretaria General. Referencia Invitación.
- Acuerdo N°133 del 14 de junio de 2022 por medio del cual se determina la estructura orgánica de la Universidad del Quindío y las funciones generales de sus dependencias.
- Acuerdo N°001 del 15 de junio de 2022. Por medio del cual se convoca a concurso publico de méritos para proveer 14 empleos vacantes y concurso de ascenso para 6 plazas en la Universidad del Quindío.
- Oficio de Sintraunicol a Secretaria General: candidatos al CUCEA enviado el 24 de junio del 2022.
- Resolución 9724 por medio de la cual se adopta las recategorizaciones de unos de los empleos de la planta administrativa de la universidad del Quindío.
- Aviso de Convocatoria Concurso publico de méritos abierto y de ascensos 01-09-2023.
- Derecho de petición enviado por el sindicato septiembre 11 de 2023.
- Contestación del derecho de petición PQR 670 del 29 de septiembre de 2023.

### **JURAMENTO**

Bajo la gravedad del juramento manifiéstanos que los accionantes no han instaurado otra acción de tutela con fundamento en los mismos hechos y derechos y contra la misma entidad, ante ninguna autoridad judicial.

## ANEXOS

Los relacionados como prueba documental. Texto de la Tutela para darle traslado a las personas accionadas

## NOTIFICACIONES

**ACCIONANTE:** VICTOR HUGO ZEA ROBLEDO, presidente Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia Sintraunicol Subdirectiva Universidad del Quindío – Seccional Quindío  
Celular: 317-5750760. Correo Electrónico: victorzea@uniquindio.edu.co

**ACCIONADO:** Universidad del Quindío Nit.890.000.432-8, representada legalmente por el señor Dr. LUIS FERNANDO POLANIA OBANDO o quien lo represente o haga sus veces, en la Dirección: Carrera 15 con calle 12 Norte; Armenia, Quindío. e-mail: [rector@uniquindio.edu.co](mailto:rector@uniquindio.edu.co). Teléfono: 6067359300 ext. 301.

Atentamente,



**VICTOR HUGO ZEA ROBLEDO**

C.C. N°9.733.861 de Armenia.

Presidente

Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia  
Sintraunicol Subdirectiva Universidad del Quindío – Seccional Quindío

Celular: 317-5750760

Correo Electrónico: victorzea@uniquindio.edu.co

 <b>El empleo es de todos</b>	<b>PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>			Código: IVC-PD-08-F-02	
	<b>CONSTANCIA DE REGISTRO MODIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O COMITÉ EJECUTIVO DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL</b>			Versión: 4.0	
				Fecha: Agosto 08 de 2019	
				Página: 1 de 1	
<b>CONSTANCIA DE DE REGISTRO MODIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O COMITÉ EJECUTIVO DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL</b>					
Dirección Territorial /	DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO		Departamento		QUINDIO
Nombre Inspector de	VICTOR HUGO VELEZ ARBOLEDA		Municipio		ARMENIA
Número Registro	27	Fecha Registro:	21/07/2023	Hora	9:55:00 a. m.

I. INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA MODIFICACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA			
Seleccione el estatuto de la organización sindical que sufre modificación:			Subdirectiva
Seleccione alcance de la modificación:	Parcial	Fecha Acta Asamblea de	19 de Julio de 2023

II. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL QUE ESTÁ REGISTRANDO EL CAMBIO					
NÚMERO DE REGISTRO	003	FECHA REGISTRO	21/07/2023	GRADO	Tercer Grado
CLASIFICACIÓN	Industria o Rama de actividad económica	NOMBRE	SINDICATO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA		
SIGLA	SINTRAUNICOL	DEPARTAMENTO	QUINDIO	MUNICIPIO	ARMENIA

III. MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL						
PRINCIPAL						
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TELÉFONO	E-MAIL	CARGO
Victor Hugo	Zea Robledo	CC= cédula de ciudadanía	9733861	3175750760	victorzea@uniquindio.edu.co	Presidente
Gloria Inés	Marizance Marulanda	CC= cédula de ciudadanía	51628072	3122234889	marizance@uniquindio.edu.co	Vicepresidente
Carlos Arturo	Molina García	CC= cédula de ciudadanía	7541087	3016397292	carlosmolina@uniquindio.edu.co	Secretario General
Julián	Murillo Hernández	CC= cédula de ciudadanía	10245903	3155264869	jmurillo@uniquindio.edu.co	Fiscal
Sandra Milena	Guzmán Sanabria	CC= cédula de ciudadanía	41931828	3152021476	sandramg@uniquindio.edu.co	Tesorera
SUPLENTE						
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TELÉFONO	E-MAIL	CARGO
Arlé Johan	Mosquera Waldo	CC= cédula de ciudadanía	11811802	3117163471	ajmosquera@uniquindio.edu.co	Secretario de Género
Carlos Andrés	García Quintero	CC= cédula de ciudadanía	4375924	3168778746	cagarciaq@uniquindio.edu.co	Secretario de Asuntos Laborales y Negociación Colectiva
Hugo Mario	Aldana Salazar	CC= cédula de ciudadanía	89003942	3168325741	hugoaldana@uniquindio.edu.co	Secretario de Comunicaciones
Luz Stella	Betancourt Guapacha	CC= cédula de ciudadanía	24495930	3006724413	isbetancourth@uniquindio.edu.co	Secretario de Derechos humanos
José Luis	Venegas Núñez	CC= cédula de ciudadanía	9730356	3137444028	jIVENEGAS@uniquindio.edu.co	Secretario de Deportes y recreación



IV. MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES COMITÉ EJECUTIVO (Aplica para Sindicatos grado 2 y 3)						
PRINCIPAL						
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TELÉFONO	E-MAIL	CARGO

SUPLENTE						
NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	TELÉFONO	E-MAIL	CARGO


V. INFORMACIÓN DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO						
NOMBRES	Carlos Arturo					
APELLIDOS	Molina García					
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	CC= cédula de ciudadanía	NÚMERO	7541087	TELÉFONO	3016397292	
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA		Cra 15 Calle 12 norte - Universidad del Quindío				
CORREO ELECTRÓNICO	Sintraunicolug@uniquindio.edu.co			CARGO	Presidente	

VI. ANEXOS		
DOCUMENTO	ANEXA	No. FOLIOS
Solicitud de depósito del cambio de Junta Directiva, suscrita por el Presidente o Secretario del Sindicato, dirigida al Inspector de Trabajo del domicilio de la organización Sindical de la Subdirectiva o Comité Seccional	SI	1
Parte pertinente del acta de elección suscrita por el Secretario General de la Organización Sindical o por quien haya actuado como secretario en la respectiva asamblea.	SI	8
Listado debidamente firmado por los asistentes a la misma.	N.A	
Nómina de los directivos, con indicación de sus nombres y apellidos, documento de identidad, y cargos que les fueron asignados	SI	1

VII. OBSERVACIONES
Notificar del Cambio al Señor Luis Fernando Polania Obando, Rector de la Universidad del Quindío, Cra 15 calle 12 norte armenia, copia Archivo sindical Ministerio del Trabajo.

Lo anterior dando cumplimiento al artículos 371 y 388 del Código Sustantivo del Trabajo, y acatando lo ordenado en las sentencias C-465 y C-695/08, proferidas por la Corte Constitucional.

Se deja Constancia que los abajo firmantes conocen el contenido del presente documento y están de acuerdo con este.

  
 (Nombre y firma)  
 Inspector de Trabajo ( VICTOR HUGO VELEZ

  
 (Nombre y firma)  
 DEPOSITANTE VICTOR HUGO ZEA ROBLEDO